

ABOGACÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD
MADRID

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

A.G. [REDACTED]

Referencia: 036/2025

INFC: [REDACTED]

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Se ha recibido en este Servicio Jurídico expediente de modificación del contrato de servicios **“ACOGIDA Y ASISTENCIA A PERSONAS SIN HOGAR EN SITUACIÓN DE CONVALECENCIA”**, formalizado con la **“FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL (RAIS)”**, con fecha 7 de junio de 2021.

A la vista de la documentación obrante en el expediente administrativo y de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 4.1.b) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid**, se emite el siguiente

INFORME**ANTECEDENTES DE HECHO:**

PRIMERO.- La fecha de inicio prevista del contrato de servicios objeto de modificación, según el apartado 18 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, fue reajustada al 15 de junio de 2021. El contrato se formalizó el 7 de junio de 2021.

SEGUNDO.- Mediante Orden 1867/2022, de 13 de septiembre, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, se aprobó la primera prórroga del contrato, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

La segunda prórroga del contrato se aprobó mediante Orden 3090/2023, de 13 de octubre, de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, desde el día 1 de enero de 2024 hasta el día 31 de diciembre de 2024.

Mediante Orden 2442/2024, de 5 de agosto, de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, se aprueba la tercera prórroga del contrato, desde el 1 de enero de 2025

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
hasta el 31 de diciembre de 2025.

TERCERO.- De conformidad con el apartado 22 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el contrato solo podrá ser modificado en los casos previstos en el artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Por su parte, el artículo 205.2.c) de la referida Ley permite la modificación del contrato cuando dicha modificación no sea sustancial.

Por ello, para la anualidad correspondiente el año 2025, atendiendo a este artículo, se pretende incrementar el número de plazas del servicio, pasando de 60 a 70 plazas, suponiendo un incremento del 17% con respecto a las plazas que se ofertaron en el contrato inicial.

CUARTO.- Mediante escrito de 1 de agosto de 2024, la entidad adjudicataria manifiesta su conformidad con la modificación propuesta

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

Primera.- El párrafo segundo de la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), remite a la normativa vigente en el momento de adjudicación del contrato con vistas a la determinación del régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción.

Atendida la fecha de adjudicación del contrato del que trae causa la modificación objeto de informe, la normativa sustantiva aplicable viene constituida por la propia LCSP. Asimismo, y en cuanto no se oponga a lo establecido en dicho texto legal, por el **Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado mediante**

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y por el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid aprobado por el Decreto 49/2003, de 3 de abril.

En concreto, y conforme a nuestra tradición legislativa, la LCSP contempla en su **artículo 190** entre las prerrogativas de la Administración en la contratación administrativa, la posibilidad de modificar los contratos por razones de interés público.

Más en detalle, desarrolla el **artículo 203** los aspectos esenciales de la potestad de modificación, viniendo a diferenciar entre las causas de modificación contempladas, con indicación de los concretos supuestos en que sea posible, en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), y las recogidas, en términos muy restrictivos, en la propia ley. Así, señala su **apartado 2** que la modificación del contrato será posible:

«a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205».

En el presente caso, la cláusula primera, apartado 22 señala que:

“Modificaciones previstas del contrato: NO.

El contrato sólo podrá ser modificado en los casos previstos en el artículo 205 de la LCSP”.

Por tanto, se trata en este caso de una modificación de las que no están previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que deben cumplir, para el caso que nos ocupa, los requisitos en el **art. 205.2.c) LCSP**:

“c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas pres-

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
taciones no se incluyeron en el contrato inicial.

*Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación **se considerará sustancial** cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:*

1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.

2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.

3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato”.

Examinando la documentación, entendemos que concurren los requisitos para que sea considerada como “**no sustancial**” la modificación, como veremos a continuación.

En la “**Memoria justificativa y económica de la modificación**”, incluida en la documentación remitida y suscrita por el Director General de Servicios Sociales e Integración, con fecha 7 de agosto de 2024, se incluyen las razones por las que no concurren dichos requisitos. Comenzando por el primero, no es posible la selección de otro candidato porque, como señala el apartado 6º de dicha Memoria:

“En la licitación del contrato de servicios denominado “acogida y asistencia a personas sin hogar en situación de convalecencia” se presentó únicamente la entidad Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral, con NIF G83207712, por lo que no se puede elegir a otro contratista para ejecutar dicha modificación

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

(...)

con la modificación no se atraería a más licitadores, ya que solamente se presentó un licitador en el actual contrato, la entidad Fundación Red de Apoyo a la Integración Socio-laboral, que además es una de las entidades que vienen ejecutando el proyecto piloto del convenio, por lo que cuenta con el conocimiento y la experiencia en la prestación de esta nueva especialidad que se pretende incluir en el servicio”.

Tampoco concurre el segundo requisito, ya que en el apartado 1º de la misma Memoria se incorpora el siguiente cálculo:

“para la anualidad correspondiente el año 2025, atendiendo a este artículo, se pretende incrementar el número de plazas del servicio, pasando de 60 a 70 plazas, lo que supondría un incremento del 17% con respecto a las plazas que se ofertaron en el contrato inicial. Sin embargo, estas 10 nuevas plazas no estarían ubicadas en el centro desde el que actualmente se presta el servicio, sino que se articularían a través de 3 “viviendas autónomas”, 2 de ellas con 3 dormitorios, y otra de 4 dormitorios, cada uno con camas individuales.

Atendiendo al límite del 10% (IVA excluido) que señala el artículo 205.2 c), entendiendo como precio inicial el precio de adjudicación, éste se situó en 2.617.080,00 €, por lo que el incremento de plazas, que supone un importe de 233.928,50 €, se sitúa por debajo de ese límite (261.708,00 €)”.

El tercer requisito tampoco concurre en la presente modificación presentada a informe. Así, no se está ampliando de forma importante el ámbito del contrato, primero, por el porcentaje que supone la modificación tal y como ya hemos visto *ut supra*. Segundo, se incluye este contrato dentro de un convenio que tiene por objeto el proyecto “*Derechos a la vivienda: el reto de la desinstitutionalización del sistema de atención al sinhogarismo*”, siendo la empresa adjudicataria precisamente una de las que firmó dicho convenio, como ya hemos visto. Como se señala en el apartado 4º, se está llevando a cabo un programa piloto dentro de dicho convenio, que está arrojando muy buenos resultados, por lo que es razonable proceder a hacer una modificación parcial del presente contrato, modificación muy reducida respecto del total del contrato original para poder aprovechar las ventajas de dicho contrato

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

piloto.

En resumen, no se trata de una modificación sustancial, por lo que efectivamente, conforme a los artículos 203 y 205.c) es procedente la misma.

Segunda.- Desde el punto de vista procedimental, aspecto en que la **disposición transitoria primera de la LCSP** no deja duda sobre su aplicación al supuesto analizado, se ha seguido la tramitación prevista con carácter general para el ejercicio de las prerrogativas en materia de contratación en su **artículo 191** así como las especialidades contempladas en su **artículo 207**, habiéndose cumplimentado en particular el trámite de audiencia a la contratista adjudicataria.

Dicho contratista, como ya hemos visto, ha manifestado conformidad con la modificación en escrito de fecha de 1 de agosto de 2024.

En cambio, no es necesario en el presente caso, el informe de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid al no cumplirse los presupuestos necesarios para ello de conformidad con el **apartado 3.b) del precitado artículo 191**¹.

En cualquier caso, deberá atenderse a lo preceptuado en el **artículo 203.3**², en relación con los artículos 207 a 63, en lo concerniente a la formalización y publicidad de la modificación.

Por lo expuesto procede formular la siguiente

¹ “será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos y respecto de los contratos que se indican a continuación: Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros”.

² “Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63».

CONCLUSIÓN:

Examinado el expediente de modificación del contrato de servicios “**ACOGIDA Y ASISTENCIA A PERSONAS SIN HOGAR EN SITUACIÓN DE CONVALECENCIA**”, formalizado con la “**FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL (RAIS)**”, con fecha 7 de junio de 2021, es conforme con la legislación aplicable por lo que el informe es favorable.

En Madrid, a fecha de firma,

**EL LETRADO DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y
ASUNTOS SOCIALES**

Firmado digitalmente por: DE SANTIAGO FONT MERCEDES GUADALUPE
Fecha: 2024.10.09 13:10

Fdo: Mercedes de Santiago Font.

**DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. CONSEJE-
RÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES.**